



La consulta plantea si resulta conforme con la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal el que por la Corporación consultante se comuniquen a la Dirección General de Aviación Civil los datos de sus actuales colegiados a fin de que por la misma se tenga conocimiento de quienes ejerzan la profesión sin encontrarse colegiados o si resultaría posible la transmisión por la citada Dirección al Colegio de los datos de los pilotos de los que disponga en la actualidad a fin de que por el Colegio puedan conocerse los datos de quienes no se encuentren colegiados.

Como cuestión previa, debe recordarse que la segunda de las opciones planteadas fue objeto de estudio por esta Agencia en informe de 17 de junio de 2003, emitido en respuesta a la consulta formulada por el propio Colegio, en que se indicaba lo siguiente:

*“El acceso por parte de la Corporación a los mencionados datos constituirá una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.*

*Siendo la cedente en el presente caso una Administración Pública, debe recordarse que el artículo 21.1 de la Ley Orgánica, en la redacción resultante de la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, dispone que “los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación hubiere sido prevista por las disposiciones de creación del fichero o por disposición de superior rango que regule su uso, o cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos”.*

*Dado que no es posible considerar que las competencias de cedente y cesionario serían similares en este caso, habría de estarse a lo establecido, en general, por el artículo 11 de la Ley, cuyo apartado 1 establece que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este principio se ve exceptuado en los supuestos contemplados en el artículo 11.2, cuyo apartado a) habilita la cesión en caso de que una Ley*



*así lo disponga, por tanto será preciso comprobar si la mencionada excepción concurre en el presente caso.*

*Tal y como se indica en la consulta, la cesión se fundamenta en el control del requisito de colegiación obligatoria, establecido en general para las profesiones colegiadas en el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, reguladora de los Colegios Profesionales, en la redacción dada al mismo por la Ley 7/1997, de 14 de abril, según la cual “Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente”.*

*Del mismo modo, los Estatutos Generales del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación comercial, aprobados por Real Decreto 1378/2002, de 20 de diciembre, establecen en su artículo 7.2 que “es obligatoria la incorporación al Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial para el ejercicio habitual, en territorio español, de las atribuciones que, de conformidad con la normativa vigente reguladora de los títulos aeronáuticos civiles en vigor, son inherentes a los títulos de Piloto Comercial y Piloto de Transporte de Línea Aérea, en sus modalidades de avión y/o helicóptero, expedidos por las autoridades aeronáuticas españolas, o de la titulación o autorización equivalente expedidos por las autoridades aeronáuticas españolas o de cualquier otro Estado siempre que habiliten legalmente en España para ejercer la profesión”.*

*Sentado lo anterior, el conocimiento de las personas que en territorio español ejercen la profesión de piloto de aviación comercial, obligados según la Ley a incorporarse al Colegio Profesional, tendría la finalidad de evitar el ejercicio de la profesión por quienes no cumplieran el mencionado requisito, lográndose así la prevención del intrusismo profesional y el control del ejercicio de la profesión colegiada.*

*Estas finalidades coincidirían con las funciones legalmente atribuidas a los Colegios Profesionales por la Ley 2/1974, entre las que cabe destacar el deber de velar por el cumplimiento de los principios deontológico a los que se somete la profesión colegiada y el de vigilar y prevenir el intrusismo profesional, razón por la cual cabría considerar que la cesión se encontraría amparada en una habilitación legal, y en consecuencia en el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, siendo por ello la cesión a la que se refiere la consulta conforme a lo dispuesto en la mencionada Ley.*

*En todo caso, debe recordarse que el artículo 4.2 de la Ley Orgánica exige que los datos sean tratados únicamente para la finalidad que motivó su recogida, en este caso la evitación del intrusismo profesional, sin que quepa emplear dichos datos personales para una finalidad distinta de la mencionada.”*



Lo señalado en el mencionado informe debe ahora analizarse a la luz de la jurisprudencia a la que expresamente se refiere la consulta. En particular, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2007, por la que se desestima el recurso de casación interpuesto por la consultante contra el auto de inadmisión del recurso contencioso-administrativo previamente interpuesto en que se instaba a la jurisdicción a ordenar la colegiación de un determinado piloto de aviación comercial señala lo siguiente:

*“A tenor del artículo 5 de sus Estatutos (aprobados por el Real Decreto 1378/2002, de 20 de diciembre y precisamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 2/1974), «el ingreso en el Colegio es requisito indispensable para el ejercicio en territorio español de la profesión de piloto de la aviación comercial». La exigencia es reiterada en el artículo 7.2 de los mismos Estatutos, según el cual «es obligatoria la incorporación al Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial para el ejercicio habitual, en territorio español, de las atribuciones que, de conformidad con la normativa vigente reguladora de los títulos aeronáuticos civiles en vigor, son inherentes a los títulos de Piloto Comercial y Piloto de Transporte de Línea Aérea, en sus modalidades de avión y/o helicóptero, expedidos por las autoridades aeronáuticas españolas, o de la titulación o autorización equivalente expedidos por las autoridades aeronáuticas españolas o de cualquier otro Estado siempre que habiliten legalmente en España para ejercer la profesión».*

*A partir de estos presupuestos, la Corporación demandante no sólo puede ejercer sus facultades directas de ejecución forzosa sino, además, utilizar otros medios indirectos para lograr el cumplimiento de sus resoluciones, también en materia de colegiación. Sólo a título de ejemplo, mientras la exigencia de colegiación subsista como norma de obligado cumplimiento, el Colegio puede dirigirse a la Administración con atribuciones en el sector de la aviación comercial para que haga cumplir, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones normativas correspondientes respecto de los pilotos que carezcan de los requisitos por ellas establecidos para el ejercicio de su profesión. Habida cuenta de que corresponde a la Dirección General de Aviación Civil (en la actualidad, a tenor de lo dispuesto en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea) verificar y acreditar la aptitud requerida al personal aeronáutico para la obtención, mantenimiento y renovación de los títulos, licencias, habilitaciones, autorizaciones, aprobaciones o certificados necesarios para el ejercicio de sus funciones, nada impide que el Colegio demandante se dirija a aquel órgano administrativo a los efectos pertinentes respecto de uno de los requisitos reglamentariamente exigibles para el ejercicio profesional.”*

El artículo 5.1 h) de la mencionada Ley 21/2003, de Navegación Aérea, atribuye al Ministerio de Fomento la competencia para “La verificación y control del cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos para

garantizar la seguridad aérea en relación con el diseño, fabricación, mantenimiento, uso y operación de las aeronaves civiles y, en general, de los productos, componentes y equipos aeronáuticos civiles, así como de los aeropuertos, aeródromos y sistemas e instalaciones civiles de navegación aérea”.

Por otra parte, el artículo 34 de la Ley 21/2003 dispone, entre otras, que “son obligaciones del personal aeronáutico las siguientes:

1ª Ejercer las funciones y realizar las actividades propias de cada clase de personal aeronáutico sólo cuando se esté en posesión de un título habilitante, válido y eficaz, para ello y cumplir las condiciones, limitaciones y obligaciones establecidas en el propio título y en la normativa que lo regule.

2ª Exhibir su título habilitante siempre que le sea requerido por las autoridades aeronáuticas y sus agentes, promover su renovación cuando vaya a expirar su vigencia y reintegrarlo al órgano administrativo responsable de su otorgamiento siempre que sea legalmente procedente”.

Además, el incumplimiento de tales obligaciones será constitutivo de infracción grave o muy grave, conforme a lo establecido en el artículo 44.

Por último, el artículo 20.2 de la citada Ley señala que “la inspección aeronáutica se extiende a todas las aeronaves, productos y equipos aeronáuticos, a los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea, a los servicios y actividades relacionados con la aviación civil, tanto en operaciones de vuelo como de tierra, al personal aeronáutico y a los titulares o explotadores de dichos servicios y actividades”, previendo el artículo 20.1 que “la función de inspección aeronáutica comprende la vigilancia y control del cumplimiento de las normas que ordenan las distintas actividades propias de la aviación civil y la supervisión para verificar los requisitos exigidos para obtener, conservar y renovar los certificados, aprobaciones, autorizaciones, licencias, habilitaciones y, en general, los documentos oficiales que habilitan para el ejercicio de funciones, la realización de actividades y la prestación de servicios aeronáuticos”.

En este sentido, siendo la colegiación uno de los requisitos legalmente exigibles para el ejercicio de la profesión de piloto de aviación comercial, la falta de este requisito podría implicar la revocación de la autorización que hubiera sido otorgada por el órgano competente para ello o la denegación de la citada autorización en caso de ser solicitada por un profesional no colegiado.

Por este motivo, la comunicación por la consultante a la Dirección General de Aviación Civil de los datos referidos a los profesionales colegiados, esto es, los que cumplen con los requisitos legalmente exigidos para el adecuado ejercicio de la profesión y la obtención de la correspondiente autorización administrativa resulta, conforme a lo que se ha señalado en la

jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha reproducido, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999.

De este modo, el Colegio Profesional podrá ejercer plenamente sus competencias, pudiendo instar al órgano al que la Ley atribuye la competencia para la autorización a que adopte las medidas tendentes a que se cumplan los requisitos legalmente exigibles para ejercer la profesión en España.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que, como se ha indicado, la competencia correspondería al Ministerio de Fomento en virtud de lo dispuesto en la Ley 21/2003, posterior a la emisión del informe al que se ha hecho referencia en el presente, de las opciones a las que se refiere la consulta se considera más adecuada la comunicación a la Dirección general de Aviación Civil de los datos de los colegiados, a fin de que por la misma se tenga conocimiento de quiénes cumplen los requisitos legalmente exigibles para el ejercicio de la profesión.